

Honorable Magistrado  
JUAN CARLOS BOTINA GOMEZ  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO.  
E.S.D.

Medio de control	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Accionante	FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO
Accionado	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO (GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO).
Coadyuvantes	ZURIC ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A., LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, COLPATRIA S.A.
Radicado:	63001-2333-000-2019-00234-00
Asunto:	Alegatos de Conclusión.

JUAN SEBASTIÁN HENAO GARZÓN mayor de edad y domiciliado en Armenia Quindío, identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.773.775 de armenia Quindío, abogado en ejercicio y portador de la T.P. N° 202632 del C.S.J. y CARLOS ALBERTO LÓPEZ ARENAS, igualmente mayor de edad y domiciliado en Armenia Quindío, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.549.093 expedida en Armenia Quindío, abogado en ejercicio y portador de la T.P. N° 290.853 del C.S.J, actuando dentro del término legal, en nombre y representación del señor T.C.(r) FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO identificado con cedula de ciudadanía No.14.322 663 expedida en Honda (Tolima), dentro del medio de control de la referencia, mediante el presente escrito presentamos ALEGATOS DE CONCLUSIÓN en los siguientes términos:

1. Está demostrado que nuestro mandante operó en el presente caso, mediante un encargo como director del CENAC.
2. Que encontrándose en ejercicio de ese encargo, recibe orden del nivel central que exigió:

*(...) debe habilitarse una edificación de las existentes en la unidad militar, para funcionar como CENAC... El edificio destinado para funcionar como CENAC dentro del BASPC8 debe someterse a mantenimiento y adecuación, no solo para garantizar su estabilidad y calidad para la prestación de sus servicios y el bienestar de los militares, sino que debe ser remodelada garantizando la capacidad de albergue requerida y la reubicación de sistemas y redes necesario para cumplir con las labores encomendadas a los responsables de cumplir las funciones administrativas y contables en el ejército nacional en esta parte del país, conforme la misión institucional encomendado a este grupo de militares; Esta edificación y redes según su naturaleza, así como sus elementos integrantes y condiciones constructivas, deben ser objeto de intervención bajo altas medidas de seguridad. (...).*

3. En virtud de dicha orden, se inicia una gestión precontractual, basada en buscar y seleccionar la mejor oferta para efectos de contratar a la persona que cumpliera con los mejores parámetros de seriedad, responsabilidad, experiencia e idoneidad. Lo que da lugar a la suscripción de los siguientes contratos:

N° 078 -BASPC8-2014 “ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC 8°. Y “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 079-BASPC08-2014”.

4. Nuestro poderdante, entonces, llega en sus actuaciones hasta la suscripción de los contratos, los cuales en su etapa de ejecución y de desembolso de dineros, correspondieron a una persona distinta a él.
5. En el fallo objeto de nulidad se expresó:

...” Como se observa la Entidad planeó y contrató obras y actividades de mantenimiento, sin embargo, se evidenció, del expediente contractual y la visita de campo, que las obras y actividades realizadas fueron la demolición de una edificación existente de un piso y la construcción de una obra nueva de dos pisos...”

Esto es, que la misma contraloría admite que la responsabilidad no es atribuible al ordenador del gasto, sino que en su interpretación es clara al evidenciar en su motivación un “**INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**” del contratista.

6. El fallo recurrido, y segundo acto administrativo demandado, se torna incongruente por quien lo analiza en reposición al constituirse la entidad accionada en Juez y parte, la cual ya no critica el incumplimiento contractual, sino, la planeación de la obra al referirse en los siguientes términos:

En la presente causa al T.C. CALLE MORENO como gestor fiscal le es aplicable además el verbo rector «PLANEAR» lo que brilló por su ausencia en esta actuación fiscal, además porque se demostró que una vez suscrito el negocio contractual, continuó ejerciendo su labor y que fue durante su desempeño donde cambió el objeto contractual, actuación que desencadenó en el detrimento patrimonial en contra de la entidad afectada, considerándose su conducta a título de culpa grave ya debidamente analizada en el fallo recurrido. NEGRILLA Y RAYAS FUERA DEL TEXTO ORIGINAL

7. Pertinente es tener en cuenta que durante el desarrollo de las diferentes audiencias, llevadas a cabo en las instalaciones de la Contraloría General de la Nación, los apoderados de los presuntos responsables fiscales en varias oportunidades solicitaron el concurso de un ingeniero externo al ente investigador, preferiblemente adscrito a alguna de las universidades de la región, con el fin de contar con una segunda opinión, lo cual no se tuvo en cuenta por parte del ente investigador, quien mantuvo su posición en todo momento, solo con las conceptos de su ingeniero de cabecera, lo cual no permitió materializar lo dicho en el principio de contradicción que debe imperar en este tipo de asuntos tan técnicos.
8. Corolario de lo anterior se tiene que la obra en mención está llamada a convertirse en un elefante blanco, toda vez que en la actualidad se encuentra abandonada a su suerte dentro de las instalaciones del batallón de servicio y apoyo para el combate 8, puesto que con la intervención de la contraloría y los fallos atacados en el actual proceso, no fue posible terminar la obra a pesar de no haberse agotado el presupuesto en su totalidad. Así las cosas todo el asunto se centra en manifestar que la obra no cumple con las normas de sismo resistencia NSR10, hecho éste que puede ser subsanado con el concurso de las partes; pues tal como están las cosas a pesar del concepto del ingeniero Hernán Alonso Aristizabal Alzate, adscrito a la contraloría, quien manifiesta en su concepto, que la edificación sin terminar incumple los requisitos de construcción sismo resistente y pone en riesgo a las personas que decidan habitarlo; ninguna autoridad, ni la Contraloría misma ha ordenado su demolición; pues con dicha decisión si se estaría originando un detrimento económico.

Con lo visto, Honorables magistrados, se tiene que nuestro mandante en su encargo, planeó en debida forma las necesidades del servicio. Igualmente, seleccionó al contratista más idóneo, y

cuya responsabilidad en obra corresponde única y exclusivamente a éste último. Nótese como la contratación en este caso no genera problema alguno relativo a “estabilidad de obra”, pues la obra en sí misma no se sostiene por un contrato, sino, por sus cimientos y gestiones de diseño y construcción que responsabilizan de manera directa a los profesionales respectivos.

Para efectos de mayor claridad, se hace necesario transcribir el aparte realizado como comparativo de los actos demandados:

*(...) Ahora bien, de un ejercicio comparativo de la motivación de ese primer acto administrativo demandado con el que puso fin a la actuación administrativa, es decir, con el auto No. 00031 del 8 de mayo de 2019, por medio del cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad Fiscal No. 00001 del 25 de febrero de 2019, adelantado dentro del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2017-01200, por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDIO (Grupo para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva del Quindío); confirmando dicho fallo. Se centra básicamente en lo siguiente:*

**“En el presente caso, el reproche del despacho es que el TC CALLE MORENO, suscribió un contrato de mantenimiento y cambió su objeto para continuar con otro negocio contractual de obra nueva, lo que conllevó al detrimento establecido en el proveído de marras”**

Lo anterior se dio por probado sin estarlo, toda vez que la Contraloría solo se basa en el acta de inicio de obra, suscrito el día 13 de Enero de 2015, para determinar que el señor Coronel Calle, mediante éste documento cambió el objeto del contrato, ordenando la demolición de la obra, lo cual no se acomoda a la realidad; pues nada tiene que ver el inicio de obra con lo que está planteando el ente investigador, desdibujando de esta manera la imparcialidad y soporte probatorio que debe enmarcar el fallo analizado, lo cual atenta flagrantemente con el debido proceso, ya que se demuestra que a pesar de existir elementos determinantes para analizar comportamientos individuales, la razón de ser de la investigación era declarar a todos los implicados responsables fiscales –como efectivamente se hizo -.

Y además le atribuyen el verbo rector planear, y entonces cabe preguntarse:

***¿Por qué razón se ataca tanto la planeación en el último recurso argumentativo de la contraloría, cuando la problemática inicial fue el recibido de una obra inútil en octubre de 2015?.***

***¿Acaso el problema directo está en la firma de nuestro cliente?***

Claramente y como se expresa en el último acto administrativo que se rebate, una cosa es el daño y otra cosa es la fecha de los hechos, pero si en la fecha de los hechos no se encontraba nuestro mandante como gestor fiscal, y estos fueron determinantes para la causación del daño patrimonial, ¿por qué entonces se ataca finalmente la planeación? No es, una salida grosera que deja en el aire el nexo de causalidad como requisito sine qua non para endilgar responsabilidad a nuestro patrocinado?

Por otro lado se dice en el fallo confirmatorio que:

**... “En el presente caso, el reproche del despacho es que el TC CALLE MORENO, suscribió un contrato de mantenimiento y cambió su objeto para continuar con otro negocio contractual de obra nueva, lo que conllevó al detrimento establecido en el proveído de marras...”**

Esto significa que el reproche fue cambiando entre la imputación, el primer fallo y finalmente se acomoda en el último fallo o acto administrativo demandado, y aquí cabe resaltar que nuestro prohiado nunca cambió el objeto contractual, fue solo en terreno, quienes intervinieron el inmueble, los que: o desarrollaron algo distinto, o encontraron situaciones propias de la teoría de la imprevisión, o sencillamente hicieron algo no contratado, pero que en campo se haya realizado algo distinto, no es determinante ni “ causa de lo causado” , esto para hacer hincapié en que ninguna de las alternativas planteadas en contra del T.C. FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO confluyen con el requisito de acreditación y prueba del nexo de causalidad. Estas situaciones atacan y vulneran el debido proceso administrativo enmarcado directamente en el artículo 29 de la constitución política -Debido proceso administrativo-

Por otro lado, nunca se resolvió lo atinente a la caducidad de la acción fiscal, no por la genérica de los cinco años, sino, por lo anotado en los descargos relativo al artículo 45 de la Ley 610 de 2000 que expresa: ***“Término. El término para adelantar estas diligencias será de tres (3) meses, prorrogables hasta por dos (2) meses más, cuando las circunstancias lo ameriten, mediante auto debidamente motivado.”***

Así se tiene entonces que:

- ***Apertura indagación preliminar Auto No. 001 de noviembre de 2016.***
- ***Cierre de indagación preliminar y traslado al grupo de investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva Auto No. 002 del 27 de abril de 2017.***
- ***Apertura e imputación de responsabilidad fiscal Auto No. 0091 del 21 de noviembre de 2017, notificado el 30 de noviembre de 2017.***

Bajo las fechas anteriormente indicadas se encuentra que la entidad contó desde el día 27 de abril con el término de tres (3) meses para realizar la debida instrucción de la investigación, sin embargo se presentaron oficios internos en el ente de control que generaron devoluciones reiteradas del expediente, siendo el último oficio remitido al Gerente Departamental del Quindío, el día 14 de julio del año 2017, pero solo se conoció del auto de apertura hasta el día 30 de Noviembre de 2017, presentando una eventual extemporaneidad en la actuación del ente fiscal, de la cual se espera el cuerpo colegiado revise con el debido detalle.

De lo anterior, se colige que los actos administrativos demandados, aparte de ser falsamente motivados, devienen de incumplimiento a normas positivas que no se cumplieron, contrariando los fines del estado (Art 2 C.P.); debido a que nuestro mandante esperaba un fallo que se encontrara enmarcado dentro de los postulados del art. 13 y 267 constitucionales, ya que la ambigüedad de las decisiones atacadas han generado un trato indigno y diferenciado a nuestro poderdante contrariando los principios orientadores de la acción fiscal (art. 2 Ley 610 de 2000 en concordancia con el debido proceso constitucional. Por otro lado, se han desconocido los elementos de la responsabilidad fiscal que contempla el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, pues no quedó clara y debidamente determinada la acción u omisión determinante en el daño, y sobre este elemento cabe resaltar, que como la contraloría intervino apresuradamente, este no pudo ser resarcido debido a que nunca se ejecutó por parte del contratista la totalidad del presupuesto que se tenía para la ejecución contractual, es decir, el daño siempre fue potencial y nunca cierto, pues, la obra deja de ser inútil, si pudiere ser terminada y en este sentido, se vulnera el artículo 23 de la norma en cita debido a que la certeza del daño es tan nublada que no se encuentra un solo argumento que acredite que nuestro mandante es responsable de un detrimento que no existe, y no existe porque una obra que pueda ajustarse a la norma NSR 10 y bajo el mismo presupuesto que se tenía para el efecto siempre deja un daño potencial, no verificado y relativo a situaciones de obra y no del señor CALLE MORENO.

Se tiene como vulnerado además el principio de congruencia, establecido en el artículo 281 del C.G.P por la abierta contradicción entre el análisis de responsabilidad que se hace de nuestro cliente y el resultado del fallo atacado. Así mismo, procede aseverar que, cuando la

ley establece las razones que autorizan la expedición del acto administrativo, está limitando en doble aspecto al ente administrativo: i. en primer lugar, le fija los únicos motivos que justifican la emisión de voluntad y, ii. en segundo lugar, le impone la obligación de motivar su acto. Además, en jurisprudencia del Consejo de Estado, con reiterada solvencia conceptual se ha sostenido que la facultad discrecional no es absoluta, sino que va encaminada al logro de buen servicio público. Las limitaciones, en el caso sub-júdice, se imponen, como está demostrado con la violación de la Constitución y la ley. (...)

Así las cosas, se considera de manera frontal, que se ha cumplido con la carga de demostrar que la accionada no cumplió con su deber de establecer o dejar probada la culpa grave en contra de nuestro representado, quien no está obligado a lo imposible, y en ese orden de ideas, su responsabilidad fenece al momento en que quien provoca un presunto detrimento, es quien ejecuta en calidad de contratista y que sus intervenciones afectan la ejecución contractual. Este nexo de causalidad deja por fuera a nuestro mandante en los límites de su responsabilidad.

Debe tenerse en cuenta que la inversión realizada a las instalaciones del CENAC, no han culminado, y que los dineros invertidos, correspondieron a una parte de lo contratado.

Vale entonces la pena preguntarse: **¿la actuación inmediata de la contraloría y la suspensión de la obra, impidió la ejecución y terminación de la obra en sí misma?**

Con todo lo anterior, y de acuerdo con el acervo probatorio allegado al plenario, les rogamos acceder a las pretensiones propuestas en presente medio de control, que se contraen a:

**PRIMERO:** *Que se declare la nulidad del acto administrativo “FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 DEL 25 DE FEBRERO DE 2019 proferido dentro de PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200 emanado de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO - GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO” por haberse expedido con violación a las normas en que debería fundarse y con falsa motivación..*

**SEGUNDO:** *Que se declare la nulidad del acto administrativo - auto No. 00031 del 8 de mayo de 2019, por medio del cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad Fiscal No. 00001 del 25 de febrero de 2019, proferido dentro de PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200 emanado de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO - GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO” por haberse expedido con violación a las normas en que debería fundarse y con falsa motivación.*

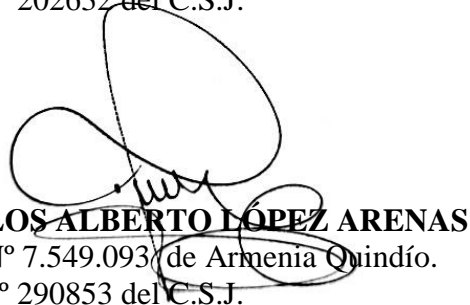
**TERCERO:** *Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA modificar parcialmente el - auto No. 00031 del 8 de mayo de 2019, por medio del cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad Fiscal No. 00001 del 25 de febrero de 2019, proferido dentro de PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200 emanado de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO - GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO” y en su lugar, disponer:*

- a- Declarar como no responsable fiscal al señor **FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO** identificado con cedula de ciudadanía No. 14.322 663 expedida en Honda (Tolima).
- b- Solicitar al grupo de jurisdicción coactiva de la gerencia departamental colegiada del Quindío, para que retrotraiga todas sus actuaciones en contra del señor **FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO** identificado con cedula de ciudadanía No.14.322 663 expedida en Honda (Tolima) de acuerdo con los actos administrativos que lo declararon responsable fiscal.
- c- Solicitar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, excluir al señor **FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO** identificado con cedula de ciudadanía No.14.322 663 expedida en Honda (Tolima) del Boletín de Responsables Fiscales.
- d- Como consecuencia de todo lo anterior ordenar a la contraloría General de la Republica, el reintegro de la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 32.600.000)**, debidamente indexados; los cuales se **VIO OBLIGADO** a pagar nuestro poderdante, el señor **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, de su propio pecunio, con el fin de recuperar un inmueble de su propiedad con matrícula inmobiliaria **280-130746**, ubicado en la ciudad de Armenia Quindío, el cual fue adquirido en compañía de su esposa, mucho antes de los procesos que nos ocupan, con el producto de sus correspondientes trabajos; el cual fue embargado por la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO - GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO**, dentro del proceso demandado. Dicho pago se efectuó el día 23 de julio de 2020, a la cuenta corriente **110050001197** del banco popular a nombre de la Contraloría General de la Republica, documento que se anexa a la presente diligencia.

De usted Honorable Magistrado, con nuestro reconocido respeto y admiración.



**JUAN SEBASTIÁN HENAO GARZÓN**  
C.C. N° 9.773.775 de Armenia Quindío.  
T.P. N° 202632 del C.S.J.



**CARLOS ALBERTO LÓPEZ ARENAS**  
C.C. N° 7.549.093 de Armenia Quindío.  
T.P. N° 290853 del C.S.J.

CLIENTE